

Santiago, quince de abril de dos mil veinticinco.

Vistos:

Por sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-6319-2023, se resolvió acoger la demanda, declarando que el despido del trabajador fue injustificado, condenando a la demandada al pago de indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de servicio, recargo del 80% del artículo 168 letra c) del Código del Trabajo, día de remuneración, más reajustes e intereses legales, con costas.

Contra este fallo, la parte demandada interpone recurso de nulidad invocando la primera causal de haber sido la sentencia pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica dispuesta en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo. En subsidio, alega la causal de nulidad referido a la alteración de la calificación jurídica de los hechos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo. Finalmente, en subsidio de lo anterior, la causal de nulidad de haberse dictado la sentencia con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, prevista en el artículo 477 inciso 1° del Código del Trabajo por infringirse el artículo 160 N° 1, letra c) del Código del Trabajo.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los abogados de las partes.

Considerando:

Primero: Que, en primer término, la demandada invoca la causal de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, pues considera que se ha dictado sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Expone que este primer vicio, se observa en la hipótesis respecto del despido declarado injustificado por el sentenciador.

Cita el considerando cuarto, y a continuación los considerandos sexto a décimo de la sentencia. Da cuenta que de las declaraciones prestadas por el testigo Sr. Raquiman y el actor, conforme a ello ha sido acreditado en autos: la existencia de amenazas por parte del trabajador al Sr. Raquiman; que esta amenaza consistió en un ofrecimiento de golpes; que esto le generó una impresión fuerte, angustia y miedo a la víctima, quién efectivamente se sintió



amenazado y concurrió a hacer una denuncia a Carabineros; que el demandante confesó en juicio la efectividad de haber amenazado a su jefe y haberle ofrecido golpes; y lo que se enmarca en los hechos expuestos en la carta de despido enviada al trabajador, cumpliendo con todas las exigencias legales.

Alega la infracción al principio de razón suficiente, al decidir no considerar la declaración del propio absolvente, quién confesó haber amenazado a su jefe, ofreciéndole golpes, cuestión que fue reiterada por el testigo de la demandada.

Precisa que, en la especie, el tribunal no ha expresado las razones jurídicas ni simplemente lógicas para arribar a su conclusión.

Agrega que, en el considerando octavo el tribunal se pronuncia sobre la carta de despido, señalando únicamente que es imprecisa y no permite hacer un análisis posterior, con la prueba rendida, en circunstancias que la prueba fue clara y suficiente para explicar los hechos ocurridos.

Sustenta la Infracción al principio de contradicción, reiterando los argumentos expuestos, en especial, por el hecho de que el Tribunal presencié la confesión expresa del demandante e interrogó a su testigo, víctima de las amenazas, por lo que se formó la clara convicción de que efectivamente habían existido amenazas de golpes por parte del trabajador. Sin embargo, decidió olvidar todos estos antecedentes, declarando que la gravedad no era tal.

Argumenta que, este vicio se manifiesto a lo largo de la sentencia recurrida, toda vez que el tribunal tiene por acreditado que el despido es injustificado, sin tomar en consideración toda la prueba rendida por dicha parte, la confesión judicial del actor y la nula actividad probatoria aportada por el demandante, mientras que su parte rindió medios probatorios, de forma oportuna y que permitían dejar en claro que existieron amenazas graves por parte del actor.

Segundo: Que, en subsidio, la demandada invoca la causal dispuesta en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, pues considera necesario alterar la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

Cita los considerandos sexto, octavo, noveno y décimo. Indica a continuación, que el sentenciador en el considerando sexto letra c) señala expresamente que quedó acreditado el altercado sucedido entre el trabajador y el jefe de departamento de Agua Potable, en cuanto al momento de llamar al Sr.



Raquiman el actor le ofrece combos, según señalan las declaraciones de nuestro testigo Emilio Raquiman y el trabajador, expresando la sentencia que estas afirmaciones son coincidentes. Posteriormente, en el considerando octavo, se señala: “Que, al particular esta sentenciadora ha considerado que los hechos que se tuvieron por acreditados no se subsumen íntegramente en la causal invocada para tales efectos...”.

Explicita que el tribunal tuvo por acreditado que existió un altercado entre el trabajador y su jefatura y, que, durante el desarrollo de este, el dependiente ofreció golpes, reconociendo el sentenciador que esto fue una expresión agresiva del actor.

Precisa que el vicio se configura porque a pesar de tener por acreditada la agresividad del hecho denunciado, la sentencia recurrida no le otorgó el nivel de gravedad necesaria para caber dentro de la causal de vías de hecho aplicada por el empleador para la desvinculación del actor. Incurriéndose en una errónea calificación jurídica errónea que se ha dado hechos que han sido debidamente acreditados en autos.

Añade que, para el sentenciador no es grave efectuar amenazas, y si se está en el contexto de una discusión es algo “normal”, “esperable”, dentro de ese ámbito. Disminuyéndole la gravedad a circunstancias que fueron fuertes e inesperadas para el Sr. Raquiman.

Tercero: Que, también de manera subsidiaria, la parte demandada invoca la causal de nulidad de haberse dictado la sentencia con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, prevista en el artículo 477 inciso 1° del Código del Trabajo al infringirse el artículo 160 N° 1, letra c) del mismo Código, por una errónea interpretación de dicha norma.

Explica que, del análisis de la sentencia recurrida, ha quedado demostrado que tuvo por acreditada que el actor amenazó a su jefatura, ofreciéndole golpes. Cuestión que el sentenciador consideró señalando que el actuar del trabajador fue indebido. Sin embargo, en el considerando octavo, la sentencia señala que los hechos acreditados no se subsumen con la causal invocada, exponiendo que únicamente el actor estaba molesto, desconociendo que haya insultado a su jefe. Agregando que esta conducta es normal dentro del ámbito de la discusión, quitándole toda la gravedad que esta actitud merece. Además, niega que tal actitud sea considerada lo suficientemente grave para



ser una expresión seria, no obstante, el testigo, señaló que sintió temor de ser agredido.

Detalla que, en la sentencia se señala que no logró ser probada la amenaza, en circunstancias de que ésta había sido reflejada en la carta de despido y probada por medio de la declaración de sus testigos y de la confesión espontánea del absolvente.

Sostiene que quedó debidamente comprobada la amenaza y acreditada que esta fue grave, por lo que al no acoger la causal invocada ha incurrido en una manifiesta infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Precisa que, legislador estableció que la causal de vías de hecho requiere: i) la existencia de una conducta indebida, la cual fue probada en autos; ii) además, que esta sea grave, cuestión que ya ha desarrollado; y iii) que esta conducta grave sea debidamente comprobada, requisito que se cumple a cabalidad, ya que, el mismo sentenciador tuvo por acreditado el ofrecimiento de golpes y las amenazas del actor, bastando para ello su propia declaración, por medio de la cual confesaba su actitud indebida.

Cuarto: Que, en su petitorio, la demandada recurrente solicita que esta Corte de Apelaciones acoja el recurso, “invalida la sentencia recurrida por haber sido dictada con infracción de las normas de las causales de nulidad desarrollada, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo, en la cual se declare que: (i) Se debe rechazar la demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones por cuanto la demandada probó que se justificaba la desvinculación del trabajador, en razón de la grave amenaza que sufrió el Jefe de departamento de Agua Potable por parte del demandante. Habiendo sido pronunciada la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, (ii) En subsidio de lo anterior, se declare que el fallo ha sido dictado con alteración de la calificación jurídica de los hechos, por lo que se debe rechazar la demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones, (iii) En subsidio de lo anterior, que se declare que la sentencia ha sido dictada con infracción de Ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y que por ende se debe rechazar la acción de despido injustificado.”

Quinto: Que en cuanto a la primera causal opuesta, esta es la del artículo 478 letra b del Código del Trabajo, es decir, cuando la sentencia “... *haya sido*



pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica” de un modo reiterado se ha venido indicando por esta Corte que dicho motivo de nulidad busca controlar el razonamiento probatorio contenido en la sentencia, a fin de verificar que en esa actividad no se hayan contrariado o vulnerado los parámetros de la lógica, de los conocimientos científicos o de las reglas de experiencia.

Para el señalado fin, el recurrente ha de ser capaz de demostrar el error, precisando en su impugnación cuáles hechos estarían incorrectamente fijados en el fallo y, sobre todo, la causa del mismo. Igualmente, para que prospere la causal alegada por el recurrente, es menester que la infracción de las normas sobre valoración de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, sea manifiesta, esto es, evidente, notoria, capaz de ser advertida a simple vista. Además, la causal exige que en el recurso se indiquen qué reglas de la sana crítica o de la lógica fueron infringidas y cómo se produce esa trasgresión.

Sexto: Que, en torno al recurso fundado en esta primera causal, se denuncian como transgredidos el principio de razón suficiente y el de contradicción. Sobre los cuales se ha dicho que de acuerdo al principio de *la razón suficiente*, para ser verdadero, todo juicio necesita de una razón suficiente; en tanto que según el principio de *la no contradicción*, si dos juicios se contraponen, implica que ambos no pueden ser verdaderos, porque una misma cosa no puede ser dos cosas a la vez.

En cuanto a la vulneración del principio de razón suficiente, el recurrente lo hace consistir en que la Juzgadora no consideró “la declaración del propio absolvente, quién confesó haber amenazado a su jefe, ofreciéndole golpes, cuestión que fue reiterada por nuestro testigo”, cuestionando el que “no se tomara en consideración la confesión judicial del actor ni la gravedad de los hechos denunciados por la víctima de la amenaza”. Sin embargo, el recurrente omite dar la relevancia que tiene a la afirmación del Juez de la instancia, realizada fruto del proceso valorativo de las probanzas, plasmado en el motivo noveno del fallo que se revisa, en cuanto señaló que lo que el absolvente admitió fue haber “ofrecido golpes”, pero, acto seguido explica “Que si bien ello exhibe una expresión agresiva del actor, por cierto indeseable entre compañeros de trabajo, a juicio de esta sentenciadora, ella no reviste la gravedad necesaria para ser calificada como una expresión seria, inminente y con la cual el afectado haya sufrido una impresión fuerte y grave”, reflexión que



realiza fruto del análisis de las declaraciones de un testigo, de las cuales desprende que el temor que dijo haber sentido, solo se reduce a una deducción suya, considerando también que el demandante nunca indicó que lo buscaría para agredirlo, a él o a su familia, o profirió alguna expresión que pudiera causar una impresión fuerte y cierta certeza de lo denunciado.

Así las cosas, al contrario del reproche que realiza el recurrente, la juzgadora dio sobradas razones al considerar que, no obstante haber reconocido el demandante el haber ofrecido golpes a su jefe, de tal reconocimiento no puede concluirse la existencia de una amenaza grave, seria e inminente, atendido el contenido genérico e inespecífico de las expresiones utilizadas.

En relación a la vulneración del principio de contradicción, que pareciera estar referido -más bien- al de “no contradicción”, el recurrente lo explica aseverando simplemente que la decisión tomada fue “manifiestamente contradictoria”, lo cierto es que su eventual trasgresión se encuentra defectuosamente planteada. En efecto, el recurrente no explica cuáles son las afirmaciones que se contienen en el fallo que son verdaderas y falsas al mismo tiempo (principal hipótesis que define este principio); tan solo se limita a consignar que la decisión del juez es “manifiestamente contradictoria” con la “prueba que fue rendida ante sus ojos”; expresión genérica que únicamente refleja su descontento con la decisión del tribunal de la instancia. En este punto, el recurso tan solo cuestiona el valor probatorio asignado por el juez a las pruebas rendidas en juicio, como si tratase de un recurso de apelación, pero sin demostrar la existencia de contradicciones en la estructura racional del discurso argumentativo, con miras al establecimiento de los hechos en la sentencia.

Resulta entonces que, al no haberse configurado la causal alegada el recurso deberá ser desestimado.

Séptimo: Que, en cuanto al recurso fundado en las causales contenidas en el artículo 478 c), y 477 en su vertiente de infracción de ley, cabe destacar que ambas causales interpuestas comparten una característica, cual es que ambas exigen fidelidad a los hechos establecidos en el fallo. En efecto, la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. A su turno, el artículo 478 letra c), por expresa precisión legal, exige mantener inmutables “*las conclusiones*



fácticas del tribunal inferior”, restricción que deben observar tanto el recurrente en sus planteamientos como el propio tribunal de nulidad a la hora de juzgar la procedencia de alterar la calificación jurídica asignada a los hechos que se tuvieron por probados.

Por ende, la impugnación y la subsecuente revisión han de realizarse con estricta sujeción a tales hechos, sin agregar conclusiones fácticas diversas de las fijadas, lo que reviste especial relevancia en el caso.

Octavo: Que debe ponerse en relieve que en la sentencia recurrida se tuvo por acreditado, en el motivo sexto y en lo pertinente, que “con fecha 1 de junio de 2023 el demandante encontró encima de su escritorio copia de un mail, impreso, de fecha 30 de mayo de 2023, en el cual el Jefe de Departamento de Agua potable y redes de agua potable, Emilio Raquiman Chacoff, informa a los operadores de la planta Manuel Montt una formalización de ciertos requerimientos necesarios para el cumplimiento de las operaciones consistente en reportes diarios de telemetría al inicio de cada turno enviando una foto, luego enviar una foto de la telemetría a mitad de la jornada laboral y luego al cerrar la jornada otra foto”.

Asimismo, se estableció que “el mismo día 1 de junio de 2023, el demandante se comunica telefónicamente con su Jefe Emilio Raquiman, con el objeto de manifestar su molestia por la nuevas instrucciones, toda vez que, consideró excedían el poder empresarial en relación a la confianza en su trabajo, iniciando una conversación telefónica con éste, un poco molesto lo que fue advertido por don Emilio, quien a su vez le solicitó que bajará “el tono” de la conversación, haciendo que el actor se molestara aún más, momento en el que le señaló que “na que bájeme el tono, ven pa ca y lo arreglamos a combos”. Emilio Raquiman, cuando escucha eso corta la comunicación”.

Por su parte, en el motivo octavo se determinó: “esta sentenciadora ha considerado que los hechos que se tuvieron por acreditados no se subsumen íntegramente en la causal invocada para tales efectos, atendido que, si bien, la forma en la que el actor encaró las instrucciones otorgadas por su jefe directo deja al descubierto un molestia que nace desde el inicio de la conversación telefónica que ambos sostuvieron, sin provocación de por medio, esto no pasó de ser una molestia, tal como se describe la conducta en la carta de desvinculación, sin que hayan existido insultos entre los trabajadores, como lo indica la carta, pero que no especifica”.



Contextualizando su decisión, en el motivo noveno, la juez de la instancia concluyó, a propósito de la expresión “ofreciéndole golpes” que formuló el demandante: “Que si bien ello exhibe una expresión agresiva del actor, por cierto indeseable entre compañeros de trabajo, a juicio de esta sentenciadora, ella no reviste la gravedad necesaria para ser calificada como una expresión seria, inminente y con la cual el afectado haya sufrido una impresión fuerte y grave, por cuanto el testigo declaró que sintió temor al pensar que el demandante lo iba a interceptar en algún lugar para golpearlo, sin embargo, ello sólo se reduce a una deducción del testigo, ya que el demandante nunca indicó que lo buscaría para agredirlo, a él o a su familia, o profirió alguna expresión que pudiera causar una impresión fuerte y cierta certeza de lo denunciado, lo que además se demuestra ya que el sr. Raquiman, interpuso una denuncia en su contra, que no probó siguiera en tramitación, situación que parece poco consecuente con emociones de miedo, temor, recelo o sentirse intimidado “.

De tal manera, se descartó la existencia de una conducta indebida de carácter grave, que denuncia el demandado en su recurso, en razón de su falta de seriedad y por razones de contexto. Este razonamiento del juez en la calificación jurídica del hecho resulta coherente con el marco normativo aplicable y, por ende, ajustado a derecho.

Así las cosas, esta Corte comparte la calificación jurídica efectuada por el tribunal del grado, en orden a que las conclusiones de la juez de la instancia, que determina que no se acreditó la existencia de una conducta indebida de carácter grave, se condicen con el contexto en que suceden los hechos y con el comportamiento usual esperable en la situación descrita.

Tales circunstancias, en consecuencia, permiten descartar la protestas del recurrente en orden a existir en la especie una errada calificación jurídica de los hechos, lo que conlleva necesariamente al rechazo del recurso de nulidad en lo que a este extremo se refiere.

Noveno: Que, consecuentemente, tampoco pueden tener cabida las alegaciones del recurrente cuando acusa una infracción legal, desde que, al considerar el tribunal del grado que la conducta desplegada por el demandante no constituye una conducta indebida de carácter grave, se ajusta a las exigencias que impone la norma del artículo 160 N°1 del código del ramo. Por lo que, justificadamente se determinó que no se encontraba establecida la causal de despido por culpa del trabajador.



De este modo, el fallo aplica correctamente el derecho llamado a regir la cuestión que motiva la controversia, lo que impone el rechazo del recurso en ambos acápites.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 477, 478, 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se rechaza**, sin costas, el recurso de nulidad deducido por la parte demandada, en contra de la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT O-6319-2023, la que, en consecuencia, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del señor ministro (s) don Daniel Aravena Pérez.

No firma el ministro (s) señor Aravena, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado funciones de suplencia.

N° Laboral-Cobranza-790-2024.





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LGYXXTWDRZ

Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Carolina S. Brengi Z. y Abogado Integrante Renee Rivero H. Santiago, quince de abril de dos mil veinticinco.

En Santiago, a quince de abril de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LGYXXTWDRZ